

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN-SALA LABORAL

Medellín, catorce (14) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Dentro del presente proceso ordinario laboral instaurado por EDILIA ACEVEDO MARULANDA en contra de la A.F.P PROTECCION S.A., se recibe memorial remitido de manera virtual por el apoderado de la parte actora solicitando:

“...se emita fallo de segunda instancia o se declare la pérdida de competencia para continuar con el proceso conforme lo siguiente:

Desde la recepción del expediente ha transcurrido más de 6 meses sin que se dé sentencia de segunda instancia conforme se ordena en el artículo 121 del CGP respecto a la duración del proceso...”

Frente a este asunto, debe señalarse que la referida disposición del Código General del Proceso no es de aplicación en los asuntos en materia laboral, por cuanto si bien el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social permite la utilización de normas análogas, su aplicación solo puede darse cuando existe carencia de normatividad en el campo laboral, siendo claro que en el referido código procesal laboral existe la regulación que le permite a cualquier persona acceder a esta justicia con todas las garantías que brinda la ley, en un plazo razonable y por la autoridad que resulte competente para cada caso, postura esta que guarda consonancia con el criterio fijado por la Sala de Casación Laboral, entre otras, en sentencias CSJ STL5866-2018, CSJ STL 16474-2019, y CSJ STL 1523-2021, y más recientemente la SL134-2023, en la que se dijo:

“Para restar toda posibilidad de éxito a estas acusaciones, basta recordar que la Sala ya definió que en los procesos

laborales no son aplicables los artículos 117 y 121 del Código General del Proceso, por cuanto la integración que admite el artículo 145 de la codificación laboral procesal, se refiere a aquellos casos en los que haya carencia de disposiciones de la especialidad. En decisión CSJ SL1163-2022, reiterada en CSJ SL2408-2022, se explicitó:

[...] la Sala considera que el Tribunal no incurrió en la infracción directa de los arts. 117 y 121 del CGP, comoquiera que estas disposiciones no son aplicables al procedimiento laboral, toda vez que no se dan los supuestos del art. 145 del CPTSS para acudir por analogía a la aplicación de tales preceptos, ya que el Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social tiene su propia regulación para garantizar a toda persona su derecho «...a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter» (nl. 1° del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

(...)

En ese orden, si dentro del proceso laboral y de seguridad social no existe una regla similar al art. 121 del CGP, ello no significa necesariamente que hay una laguna normativa que deba suplir el juez, puesto que el legislador tiene adoptados otros mecanismos que sirven para la misma finalidad, según la especialidad del derecho, como son los previstos en el procedimiento laboral y de la seguridad social.

La pérdida de competencia del juzgador por no dictar la sentencia dentro de un plazo razonable que prevé el art. 121 del CGP no es la única forma de hacer efectivos los principios de celeridad y la garantía del plazo razonable, inclusive, puede llegar a ser contraproducente, como lo previó la misma Corte Constitucional en la Sentencia C-443-2019, cuando analizó el alcance del artículo 121 del CGP y declaró inexecutable la expresión «de pleno derecho» contenida en el inciso sexto de dicho artículo y la exequibilidad condicionada del resto de este inciso, en el entendido de que «...la nulidad allí prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del Código General del Proceso».

Resta decir que la Sala no desconoce la sentencia de la Corte Constitucional T-334-2020 donde adoctrinó que el art. 121 del CGP sí es aplicable al procedimiento laboral y de seguridad social, sin embargo, por las razones antes expuestas, no comparte esa postura, y la misma solo produce efectos inter partes.

Razones más que suficientes para no acceder a la solicitud elevada por el apoderado de la parte actora frente a la aplicación a lo dispuesto por el artículo 121 del Código General del Proceso en asuntos laborales.

Obrando en armonía con lo antes expuesto, el suscrito Magistrado,

RESUELVE:

1. NEGAR POR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por el apoderado de la parte demandante, según los términos dispuestos anteriormente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

El Magistrado



CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES

Certifico: Que el auto anterior fue notificado por
ESTADOS N° 45 fijados hoy en la secretaria
de este Tribunal, a las 8 a.m .
Medellín, 15 de marzo de 2023

SECRETARIA